

Mirza, Christian Adel. Capítulo IV. Conclusiones finales. Cinco tesis respecto de los movimientos sociales, la democracia y los sistemas políticos. En publicación: Movimientos sociales y sistemas políticos en América Latina: la construcción de nuevas democracias.
Christian Adel Mirza

CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES FINALES

CINCO TESIS RESPECTO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES, LA DEMOCRACIA Y LOS SISTEMAS POLÍTICOS

Programa Regional de Becas CLACSO, Buenos Aires, Argentina. 2006. ISBN: 987-1183-45-3. Disponible en la web: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/mirza/partellc ap4.pdf>

Fuente: Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe de la red CLACSO
<http://www.clacso.org.ar/biblioteca>

AL RECONSIDERAR LAS HIPÓTESIS que planteamos como punto de partida, intentamos recomponer el esquema original de análisis desde una integración de las dimensiones y variables más relevantes. Las hipótesis planteaban lo siguiente:

- La mayor autonomía de los movimientos sociales respecto de los partidos políticos habilita a generar alternativas de construcción democrática sobre nuevas bases.
- La conformación de plataformas amplias de actores y movimientos sociales contribuye a afianzar las capacidades singulares e incrementar su legitimidad social.
- La pérdida de confianza de algunas de las instituciones democráticas ha generado cierta vigorización y tonificación de la sociedad civil organizada en movimientos sociales, favoreciendo especialmente la emergencia de nuevos actores sociales.
- La implantación del modelo neoliberal provocó la convergencia de mayores agregaciones sociopolíticas, reconfigurando las relaciones entre Estado, partidos políticos y movimientos sociales.

A partir del examen realizado es posible arribar a ciertas conclusiones, refutables o discutibles, pero fundadas en una interpretación de los procesos recientes en la historia latinoamericana, y contrastados con

datos contruidos con el propósito de comparar, establecer correlaciones firmes y decodificar los vínculos entre el sistema político y la acción social colectiva, a fin de vislumbrar senderos posibles e itinerarios probables de las democracias en el subcontinente.

TESIS 1

La mayor autonomía de los movimientos sociales respecto de los partidos políticos habilita a aquellos a generar, producir y ofrecer alternativas de construcción democrática sobre nuevas bases. Ello supone que en todos los casos señalados en nuestra investigación, en el discurso y la práctica sociopolítica de los movimientos sociales, la democracia tiene valor *per se*, en tanto sus contenidos universales refieren a la posibilidad real de decidir, de confrontar y resolver los conflictos sociales desde la esfera de la política. Aquella autonomía implica la capacidad de los movimientos sociales para definir estrategias singulares en función de los intereses de sus componentes, sin que por ello se infiera que se constituyen en entidades absolutamente desconectadas de sus entornos de influencia, descontextualizadas y prefiguradas a partir –exclusivamente– de identidades e intereses específicos de sectores sociales en un territorio, en una nación y un momento particular.

Mientras que la autonomía de los movimientos sociales podría significar una lejanía o distancia respecto de los partidos políticos en general, ello parece contradecir la proximidad de aquellos movimientos sociales con algunos partidos, sobre todo de signo progresista o ideológicamente más posicionados a la izquierda. La correlación o fuerte asociación entre actores sociales relevantes en la arena pública de la confrontación y movilización social, con partidos políticos afines a sus enfoques y estrategias de acción colectiva, indicaría la intencionalidad implícita de los movimientos sociales de adquirir un protagonismo mayor en el campo de la disputa por la hegemonía en alianza con determinados sectores o fuerzas político-partidarias, pero de ninguna manera el relevo en las funciones y roles de los actores políticos. Hay indicios, sin embargo, de una prolongación hacia la esfera de la competencia típicamente electoral, de la acción de algunos movimientos sociales que han creado –o intentan hacerlo– sus propios instrumentos de intervención en el sistema de partidos (CONAIE y MUPP en Ecuador, CTA, en particular la FTV con la idea de generar un equivalente del Partido de los Trabajadores brasileño en Argentina aun cuando sea un partido provincial, entre otros). No es una práctica generalizada, aunque sí lo es la problematización de la participación a nivel de la política institucional, que los miembros de los movimientos sociales se plantean de manera paralela y contemporánea a la pérdida de la cautividad del electorado y la influencia de los partidos políticos para captar sus adhesiones. En

todo caso, la izquierda social se asocia a la izquierda política, desde un relacionamiento entre contrapartes con intereses comunes y no necesariamente idénticos, pero cada vez menos en la lógica de la subordinación o la cooptación.

TENTATIVA TIPOLOGICA

Pensamos que es posible ensayar una primera aproximación a una tipología de movimientos sociales en función de la variable *autonomía*, lo que nos ayudaría a caracterizarlos a partir de perfiles prevalentes y establecer ciertas correspondencias con los sistemas políticos. Las categorías que proponemos no encierran rasgos estructurales, fijos o inamovibles de los movimientos sociales, no establecen una condición permanente, sino sobre todo atributos dados por una coyuntura socio-política, por el origen o condiciones del entorno en su nacimiento, por los recursos culturales creados o autoproducidos, o que proporcionados exógenamente los condicionan, por factores ideológicos y/o simbólicos, por sentidos o pertenencias compartidos o identidades adscriptas a itinerarios comunes; en fin, también por la propia cultura política del país en el que se inscriben las luchas sociales. Así, si identificamos unos movimientos sociales más próximos a estar ubicados en la categoría *a*, *b* o *c*, aquellos podrían acaso cambiar por las múltiples razones que, en determinada etapa o incluso momento particular, los ubican precisamente en una u otra categoría. Hasta podríamos percibir una combinación matizada de los atributos, en un continuo devenir entre las categorías definidas. A esos efectos definimos una tipología simple de tres categorías.

A. MOVIMIENTOS SOCIALES REFLEJODEPENDIENTES

El bajo grado de autonomía se evidencia cuando el movimiento social se encuentra trabado para definir sus estrategias de lucha, en cierto sentido atrapado en sus propias contradicciones pero incapaz de soltar sus amarras o ataduras, bien con el o los partidos políticos que lo acometen para influir en una dirección u otra, bien por el Estado que establece vínculos clientelares y mediadores (en ocasiones digitando y funcionalizando, penetrando sus estructuras) entre las bases y las cúpulas, lo que agrega un distanciamiento de aquellas por falta de credibilidad y confianza. En la historia de cualquier movimiento social esta caracterización puede registrarse puntualmente, o perdurar por algún tiempo, o galvanizarse ocasionando entonces la desnaturalización del movimiento social (licuando su identidad y disolviendo su propia esencia, su sentido de ser).

Algunos ejemplos: el caso de Ad-Mapu (Chile) en el primer tramo de su trayectoria y en función de la querrela por el control de la direc-

ción del movimiento entre los comunistas, socialistas, otras corrientes de la izquierda marxista y del tronco democristiano; el caso del FUT (Ecuador) en función de su tripartismo en la conformación del consenso estratégico, sobredeterminada por los partidos políticos; el caso de la CTV (Venezuela), por su vinculación originaria y matricial con la socialdemocracia de AD que condicionó de manera significativa su papel en la oposición al chavismo.

B. MOVIMIENTOS SOCIALES MODERADAMENTE AUTÓNOMOS

En esta categoría identificamos movimientos sociales de larga trayectoria, o al menos continuadores de una acción social colectiva acumulada en un cierto sentido (en algunos casos claramente tributarios del movimiento obrero de los años setenta), relativamente consolidados, con fuerte tradición de luchas y movilizaciones, que establecen vínculos privilegiados con algunos actores políticos pero en términos de mayor autonomía respecto de las orientaciones y definiciones estratégicas. Esto es, cuentan con un amplio arco de valores, símbolos, discursos y proyectos sociopolíticos coincidentes con partidos políticos (fundamentalmente ubicados en la izquierda del sistema), que de algún modo los impregnan e intentan influir desde sus propias lógicas competitivas en el espacio de la confrontación social. En esta dinámica establecen lazos de mutua influencia con aquellos, pero mantienen un grado significativo de autonomía en tanto movimientos sociales con esferas específicas a resguardo de las determinaciones externas a sus campos de actuación en la sociedad civil. Por esta razón los caracterizamos como movimientos moderadamente autónomos, lo que de suyo reconoce vectores que de un modo u otro intervienen “desde fuera” para delimitar las coordenadas de sus tácticas y repertorios de lucha, plataformas de reivindicación y, sobre todo, del sustento ideológico que nutre los contraproyectos sociales.

Son ejemplos ilustrativos la CUT de Brasil y la CUT de Chile, el PIT-CNT y el movimiento cooperativo de FUCVAM en Uruguay.

C. MOVIMIENTOS SOCIALES RADICALMENTE AUTÓNOMOS

Alcanzamos a visualizar movimientos sociales que hacen de la autonomía un asunto esencial, anudado en una concepción radical de la participación de las bases, el respeto a la horizontalidad, una aprehensión a toda clase de desviación burocratizadora y una visión autogestionaria que incluso se plasma en la incursión en áreas no asociadas a las tradiciones e historias de la protesta social (nos referimos a los ensayos económico-productivos, investigación, educación y capacitación de los miembros de los movimientos sociales). Aun cuando tanto partidos políticos como corrientes ideológicas diversas se intersecan en

la pluralidad de ámbitos de gestión social, impregnando las estructuras internas de los movimientos sociales, la autonomía se hace visible al anteponer los intereses del propio movimiento a todo intento (tanto desde el Estado como desde los partidos políticos) de absorción e instrumentalización exógena.

Son ejemplos de este tercer tipo el MST de Brasil, los MTD o Movimiento Piquetero (Argentina), sobre todo algunas de sus expresiones orgánicas de base, y la CTA de Argentina, sobre todo a raíz de su compleja red de organizaciones, agregaciones, espacios y ámbitos de diverso grado de formalización interna, con corrientes plurales muy variadas; la CONAIE de Ecuador.

Desde esta mirada proponemos una conclusión preliminar: los sistemas políticos institucionalizados de larga duración (aun con interrupciones en sus trayectorias) estarían más asociados en el último tramo del siglo XX a los tipos *a* y *b* (por ejemplo, Venezuela durante cuarenta años, Uruguay desde la mitad del siglo y Chile desde al menos cuarenta años), mientras que los sistemas políticos incoativos (como Brasil y Ecuador) se asocian más a la categoría *c*. Incluso las variantes que se identifican cuando un sistema político pasa de ser fuertemente institucionalizado a registrar indicadores o rasgos de un sistema incoativo (Argentina a partir de mediados del noventa, Venezuela en el último lustro) o viceversa (Brasil en la última década) pueden mostrar esa tendencia. Ensayamos una explicación posible: los rasgos de fuerte arraigo en la población y las conexiones estrechas de los partidos con organizaciones sociales, la legitimidad social del sistema de partidos (balance de lealtad y alineamiento) y confiabilidad en los partidos políticos y en las instituciones democráticas perfilan un sistema fuertemente partidocrático y con efectos centrípetos de tal envergadura, que los márgenes para un desarrollo autónomo de la sociedad civil sobre la conformación de movimientos sociales laxos y expandidos son demasiado estrechos como para permitir la consolidación de aquellas autonomías radicales.

Resulta interesante examinar la evolución de movimientos sociales (en el contexto de sistemas más institucionalizados) en la fase de transición democrática y la fase de consolidación inmediata posterior: la euforia participativa, la ebullición de iniciativas en el campo social y el alto grado de movilización luego se decantan y “deprimen”, conforme el sistema político –o más precisamente el sistema de partidos– conquista espacios cada vez mayores en los cuales se producen y procesan las principales orientaciones, decisiones y mutaciones, tanto valorativas como normativas, de la política (efecto centrípeto). Al producirse el desgaste y la degradación de la confianza en los partidos políticos, el sistema de partidos se vuelve menos institucionalizado; la retonificación de la sociedad civil es un proceso que se alimenta de esta

degradación, al mismo tiempo que dialécticamente la estimula. El campo propicio para la emergencia o el desarrollo de movimientos sociales radicalmente autónomos *ceteribus paribus* se vería ensanchado por efecto de la desinstitucionalización del sistema de partidos.

La autonomía de los movimientos sociales respecto de los partidos políticos, del Estado y de cualquier otra organización económica o religiosa es lo que les ha permitido construir una identidad propia y asumir la representatividad conferida por los sectores sociales que han depositado en aquellos la legitimidad de la lucha y los reclamos. Autonomía que implica mayores grados de libertad de decidir los momentos de la lucha, sus por qué y para qué, refrendando su capacidad de construir democracia desde abajo en la medida en que los sectores sociales se integran y sostienen sus actuaciones, y democracia desde arriba en la medida en que conquistan nuevos espacios para incidir, para tener más injerencia en las grandes definiciones estratégicas. Así, la autonomía adquiere importancia en tanto los movimientos sociales (societales) se convierten en *sujetos de las historias cotidianas y sujetos de la historia nacional y regional*. Libertad para aportar sin ataduras o al menos con menores constreñimientos, sus contribuciones para que la democracia se vea reforzada al mismo tiempo que revalorizadas sus instituciones, a condición de su profunda renovación para “hacer más y mejor democracia”. La maximización de la autonomía no conllevaría en consecuencia la dualización ni la dicotomización del sistema democrático, alentando antes bien la transformación de los rituales formalistas en instancias cada vez más sustantivas. La prosecución de fines políticos no anula ni inhibe el papel de los movimientos sociales en la construcción democrática. Aquellos movimientos en los cuales la disputa por su hegemonización y control por parte de los partidos políticos ha logrado adueñarse de sus propias lógicas de decisión, han perdido no sólo autonomía sino relevancia social, peso de poder efectivo.

Por otra parte, la pluralidad de sectores o corrientes políticas, o al menos de múltiples fracciones de un mismo partido que se disputan la hegemonía o la influencia en un movimiento social, puede tener efectos de anulación recíproca, preservando finalmente su autonomía, o de lo contrario efectos entrópicos, de pérdida de las reservas energéticas, dependiendo del grado de apropiación del movimiento (varios son los ejemplos, en una dirección u otra, ya planteados: del PT con la CUT en Brasil, del EP-FA con el PIT-CNT en Uruguay, del MUPP con la CONAIE en Ecuador, del PC con Ad-Mapu en Chile, de la izquierda con la CTA o los piqueteros en Argentina, de AD con la CTV en Venezuela). Ello constituye sin duda un asunto de enorme trascendencia en el análisis de las aportaciones de los movimientos sociales, no sólo a la consolidación de las democracias, sino también a la posibilidad o no de favorecer la refundación del sistema democrático desde principios, normas y

criterios renovadores, que conjuguen tanto la dimensión participativa y la ampliación sustantiva de la ciudadanía (ejercicio activo de los derechos), como los aspectos relativos al bienestar y el desarrollo de las poblaciones involucradas. La degradación, o sencillamente la carencia de autonomía de los movimientos sociales, puede desembocar finalmente en la abulia, el carácter anodino o inocuo de estos, debilitando de manera sensible el tejido social.

TESIS 2

La conformación de plataformas y ámbitos de relativa organicidad que aglutinan un número significativo de movimientos sociales contribuye a afianzar y amplificar sus propias capacidades y aumenta su legitimidad respecto de la sociedad civil. Efectivamente, los casos estudiados dan cuenta de una sostenida acción de conjunto entre actores sociales diversos pero no antagónicos, que han logrado en ciertas circunstancias aproximarse a lo que podríamos catalogar como un mínimo denominador común que condensa los intereses de la mayoría popular. Ejemplos como el Frente Nacional contra la Pobreza en Argentina, la Concertación por el Crecimiento y el Trabajo en Uruguay, la Plataforma contra el ALCA en Brasil, la Coordinadora de Movimientos Sociales en Ecuador y el Congreso Democrático del Pueblo en Paraguay aportan argumentos de peso para imaginar futuras rutas de agregación de intereses, y sobre todo de ampliación de las intersecciones orgánicas para una acción social estratégicamente concertada. Las contribuciones de estos ensayos exitosos de articulación sociopolítica al fortalecimiento de la democracia y su reorientación normativa auguran itinerarios novedosos en la reasignación de funciones e incluso en la propia reingeniería institucional del sistema democrático. Parece bastante evidente que aquellas articulaciones y plataformas, en los que no sólo convergen movimientos sociales, sino también organizaciones y partidos políticos de signo progresista, renovadores o de izquierda, han favorecido la percepción de la fuerza y validez de la acción colectiva, sustentada de manera casi ininterrumpida por la mayoría de los movimientos sociales, contribuyendo a consolidar sus fortalezas y aumentar notablemente las capacidades de convocatoria y movilización ciudadana.

Parece necesario indicar que, tanto a nivel regional como mundial, la concurrencia de actores y movimientos sociales que tanto articulan y coordinan sus estrategias, como generan procesos y ámbitos de intercambio de visiones, prácticas y ensayos socioeconómicos, ha beneficiado enormemente la visibilidad y la eficacia de la acción social colectiva. La configuración del Foro Social Mundial, así como de otras plataformas de agregación transversal de las luchas sociales, se orienta a resignificar los procesos de globalización y mundialización

desde el lente de las corrientes antineoliberales y proclives a sustentar un discurso de carácter emancipatorio. En ese sentido puede avizorarse un posible recorrido colectivo quizás hacia la conformación de un Movimiento Social en el cual tienden a unificarse los movimientos sociales, sin perder por ello diversidad, autonomía ni especificidad. Los principios constitutivos y orientadores de la acción social colectiva podrían sintetizarse en tres ejes: la reivindicación o construcción de una democracia inclusiva y sustantiva (expansión de la ciudadanía, pleno ejercicio de los derechos sociales y políticos), la lucha por la soberanía y la emancipación latinoamericana y de todas aquellas naciones sometidas del mundo subdesarrollado (luchas contra la hegemonía imperial y el control de las corporaciones multinacionales), y la generación de nuevas modalidades de producción y distribución del poder y la riqueza (luchas contra el modelo neoliberal, interpelación a los modos contemporáneos de acumulación capitalista).

TESIS 3

La pérdida de legitimidad de algunas de las instituciones democráticas contribuye de manera significativa a la vigorización y tonificación de la sociedad civil organizada en movimientos sociales, y favorece especialmente la emergencia de nuevos movimientos sociales. Desde mediados de la década del ochenta, y tras haberse consolidado de manera relativa la democracia en casi todos los países del subcontinente latinoamericano, se inició una etapa de profundización del modelo neoliberal, que con distintos grados de aplicación y éxito en el manejo de los indicadores macroeconómicos fue impactando negativamente en la mayoría de las poblaciones involucradas. Al mismo tiempo, los sistemas políticos mostraron una tendencia a la inestabilidad y creciente fragilidad, reflejada en indicadores de insatisfacción con la democracia, pérdida de confianza en los partidos políticos y descreimiento en instituciones democráticas que, como el Parlamento, vieron decrecer también la confianza de los ciudadanos. Observamos concomitantemente un renovado protagonismo de actores y movimientos sociales y, sobre todo en algunos países con rasgos típicamente asociados a la desinstitucionalización, la aparición de nuevos movimientos sociales, muchos de ellos de anclaje socioterritorial.

Si efectivamente anotamos una fuerte correlación entre la pérdida de confianza en las instituciones democráticas (sobre todo de los partidos políticos y el Parlamento) y el mayor protagonismo de los movimientos sociales en la arena pública, en algunos países más que en otros –de manera evidente en Ecuador y Argentina, independientemente de la caracterización de sus respectivos sistemas de partidos (incoactivo o institucionalizado)–, parece plausible señalar la trascendencia

del papel que pueden jugar los movimientos sociales precisamente en la consolidación y/o reformulación de las democracias. Ahora bien, por otro lado, el análisis del sistema de partidos institucionalizado en Uruguay e incoativo en Brasil (aunque, como hemos advertido, con tendencia a la institucionalización) nos exige una mirada temporal para arribar a conclusiones primarias. En Argentina, el proceso de restauración democrática volvió a colocar a los partidos políticos en la centralidad del espacio público (confirmando su modelo institucionalizado), pero a partir de la degradación de sus indicadores de confianza nuevos movimientos sociales se hicieron presentes y protagonistas (en el tránsito por la zona de turbulencia social, económica y política); mientras que en Uruguay el alto grado de institucionalización de su sistema de partidos no se vio afectado sino hasta fines de los noventa, cuando el país ingresó también en una zona de turbulencia económica y social, con pérdida de niveles de confianza en sus instituciones democráticas (Parlamento y partidos), y aumento moderado del protagonismo de los movimientos sociales –aunque el sistema de partidos aún mantiene un alto grado de institucionalización. En Brasil, el sistema de partidos incoativo desde los años ochenta se asoció a la emergencia y el desarrollo de nuevos movimientos sociales, mientras que la tendencia a su institucionalización opera en un sentido de recuperación de la confianza en las instituciones democráticas o al menos en una caída mucho menos pronunciada de algunos indicadores. En Ecuador, como sostuvimos, el sistema de partidos incoativo se mantuvo en esta categoría y registró un descenso agudo de los niveles de confianza en sus instituciones democráticas, influyendo de manera decisiva en la irrupción y el desarrollo de nuevos movimientos sociales a partir de una reorientación del movimiento indígena. Contrastando estos cuatro países con los tres que sirven de espejo-referencia, observamos un sistema de partidos institucionalizado en Chile, con indicadores de importante pérdida de confianza en las instituciones democráticas, pero no necesariamente asociada a la emergencia de nuevos movimientos sociales fuertes y protagonistas en la arena pública. Lo mismo sucede con Venezuela, que contó históricamente con un sistema de partidos consolidado e institucionalizado, el cual, a diferencia de los de Chile y Uruguay, colapsó a mediados de los noventa, dejando un vacío que en parte han sustituido unos movimientos sociales todavía muy débiles. Paraguay es un caso excepcional, en la medida en que sigue considerándose un sistema hegemónico en transición, aunque con avances interesantes desde el punto de vista de los movimientos sociales en emergencia y consolidación orgánica.

Los sistemas de partidos con mayor grado de institucionalización aparecen asociados con una mayor proporción de movimientos sociales relativamente consolidados, mientras que los sistemas incoativos se asocian mucho más con movimientos sociales emergentes y en

la primera fase de desarrollo. La pérdida de confianza en los partidos políticos y en el Parlamento, junto con el descenso paulatino del grado de satisfacción con la democracia en América Latina, contribuyeron a trasladar el eje de la acción social colectiva a movimientos sociales más o menos innovadores, la mayoría de los cuales son portadores de discursos antisistémicos, pero no antidemocráticos. Dichos movimientos sociales tienden a ocupar espacios de actuación en la arena política, compitiendo con los partidos políticos por la representación de intereses y demandas; despliegan estrategias de movilización utilizando un repertorio de tácticas y modalidades no tradicionales, además de establecer una esfera importante de autonomía en el decurso de los conflictos sociales. La correlación entre el proceso de pérdida de confianza en los partidos políticos y desinstitucionalización, con el estímulo al desarrollo y vigorización de los movimientos sociales, es atravesada por variables económicas. Así, hemos observado que los lapsos de mayor turbulencia institucional y protesta social en Argentina estuvieron marcados por el colapso financiero (default); la caída de la confianza en los partidos políticos y el Parlamento en Uruguay coincide en buena medida con el colapso del sistema bancario, la devaluación y la recesión económica; en Ecuador, el agudo deterioro de la estabilidad institucional y la caída de la confianza en la democracia, así como el estallido social, se vincularon directamente con la crisis económica y las medidas tomadas por el gobierno entre 1999 y el año 2000.

Es en este contexto que sostenemos la necesidad de revalorizar las aportaciones de los movimientos sociales, en el sentido de ensanchar la base de apoyo y legitimidad del sistema democrático en el subcontinente, como una de las estrategias consistentes para expandir la ciudadanía y obtener en definitiva mayores grados de estabilidad institucional. No se trata, por cierto, de menoscabar o subestimar la esencialidad del sistema de partidos en una democracia, sino de considerar que a su lado es posible vislumbrar un espacio de participación y representación social –también institucionalizado– autónomo, con la finalidad de asegurar la preservación de un sistema de convivencia y resolución de conflictos aún frágil y sin duda perfectible.

TESIS 4

La implantación de un modelo neoliberal de corte hegemónico en América Latina y el Caribe ha provocado la convergencia de mayores agregaciones sociopolíticas, reconfigurando las relaciones entre el Estado, el sistema de partidos y los movimientos sociales. La constitución de frentes o plataformas de carácter sociopolítico, en las que convergen actores, movimientos sociales y partidos políticos en su mayoría de oposición y más volcados hacia la izquierda del espectro ideológico, responde por

un lado a la fragilidad e inestabilidad democráticas, pero sobre todo a la necesidad de articular en primer lugar una resistencia más eficiente al modelo neoliberal, y por otro lado, a la creciente conciencia de una unidad de estrategia y de lucha en el terreno de la defensa de la soberanía, la reivindicación de los derechos de ciudadanía y la restitución de los valores democráticos frente al avance omnipresente del mercado.

Hemos adelantado en varias oportunidades la conformación de grandes corrientes más o menos articuladas que fueron sumando actores y movimientos sociales en una estrategia concertada de oposición, resistencia y deconstrucción de los dispositivos ideológicos que el “pensamiento único” desplegó en casi todas las naciones latinoamericanas. La prevalencia del mercado como el mecanismo predilecto para la asignación de recursos y generación de oportunidades para la movilidad ascendente de los ciudadanos, suplantando al Estado en la provisión de satisfactores y servicios públicos, dejó a miles de latinoamericanos en condiciones de creciente pauperización, sin la mínima protección social. No obstante la prescindencia del Estado y la instrumentación de políticas sociales compensatorias de los estragos provocados por los ajustes fiscales sucesivos, la desestructuración del tejido social y la segregación territorial, es precisamente en estos territorios, reapropiados como espacios de articulación y recomposición de solidaridades, donde se tejieron nuevas alianzas, plataformas, asociaciones coordinadoras y encuentros cada vez más masivos y abarcadores de un conjunto amplio de actores y movimientos sociales antineoliberales. Campesinos y trabajadores rurales, pequeños productores rurales (hortifruticultores, granjeros), sindicatos del sector público y privado, indígenas, movimientos de derechos humanos y ecologistas, asociaciones de profesionales, gremiales y cámaras del empresariado nacional, organizaciones de mujeres y gremios estudiantiles y juveniles, asambleas y organizaciones barriales o vecinales, partidos políticos de signo progresista o de izquierda; en fin, una mirada de actores unidos por una vocación compartida de contraponer opciones a la hegemonía (económica, cultural e ideológica) neoliberal. Cuando analizamos los movimientos sociales en las siete naciones sudamericanas estudiadas, hallamos un hilo conductor en la mayoría de los discursos y propuestas que aluden al enfrentamiento con el neoliberalismo, al mismo tiempo que a la producción de prácticas sociales, recuperación de identidades comunitarias y redes que se construyen como sustitutivas de inexistentes o menguados mecanismos estatales de protección social.

Hemos mencionado el Frente contra la Pobreza en Argentina, la creación del Congreso Democrático del Pueblo en Paraguay (que reúne a la Plenaria Popular y al Frente Nacional de Defensa de los Bienes Públicos y el Patrimonio Nacional), la Concertación por el Crecimiento y el Trabajo en Uruguay, la Coordinadora de Movimientos Sociales en

Ecuador, la Plataforma contra el ALCA en Brasil; todos ejemplos de articulación expansiva de movimientos y actores sociales vertebrados en torno a la oposición unánime ante un modelo implantado en el campo económico y social, logrando la sumatoria y convergencia de reivindicaciones que décadas atrás parecían irreconciliables o incompatibles. El perjuicio de las políticas económicas instrumentadas sobre la base de la desprotección de las industrias locales o nacionales, la apertura indiscriminada, las privatizaciones, la ausencia casi total de control sobre el flujo de capitales, el estímulo a la especulación financiera, el desmantelamiento de sectores enteros de la industria, la enajenación del patrimonio estatal y la depredación de los recursos naturales involucraron a sectores socioeconómicos nunca antes afectados tan negativamente. Esta es una de las motivaciones y razones que explican el ensanche de las plataformas de oposición, movilización y lucha contra el neoliberalismo. Dichas circunstancias abonaron el terreno para la configuración de ámbitos más o menos formalizados, permanentes y congruentes en términos de anteponer contraproyectos de contenido plural, pero sobre premisas de integración e inclusión social, recuperación del trabajo y el empleo como eje de recomposición, y la búsqueda de nuevos mecanismos de reconstitución de la trama social severamente dañada.

Los partidos políticos también sintieron los impactos de la implantación del modelo, reconvirtiendo sus discursos y sus posturas a fin de evitar o al menos frenar, por un lado, la estrepitosa caída de sus respaldos electorales y, por otro, recomponer sus relaciones con la ciudadanía, que hubo de trasladar y depositar la confianza retraída del sistema de partidos al campo de los movimientos sociales, percibidos con frecuencia como las únicas y últimas opciones (la última línea de defensa de la sociedad civil frente a los “embates” del mercado), dotándolos de mayor impronta confrontacional, resistencia, rebeldía y sublevación. La protesta social registró una tendencia a diversificarse, pero informada de algunas claves comunes, las cuales nutrieron las aproximaciones que progresivamente se fueron constatando entre actores y movimientos sociales en una orientación opositora y a los partidos políticos que inequívocamente se posicionaron en contra de las recetas y políticas neoliberales. De esta manera se gestan agregaciones y confluencias sociopolíticas de amplio espectro, que intentan por su cuenta la búsqueda de respuestas alternativas de consenso, aunque inevitablemente consideren las lógicas del conflicto social en una fase concentradora del capitalismo financiero.

TESIS 5

Sólo la ampliación sustantiva y no formal de la participación de la sociedad civil y particularmente de los movimientos sociales en la refun-

dación de la democracia latinoamericana consolidará un modelo de convivencia y construcción de relaciones igualitarias en el plano económico y político, de modo que garantice la estabilidad de los sistemas políticos y su desarrollo sostenido. El riesgo de la inestabilidad crónica o endémica en el subcontinente, producto en buena medida de la incapacidad de los sistemas de partidos y del propio esquema democrático para enfrentar los acuciantes problemas del desarrollo y crecimiento económico con equidad, será mayor cuanto más se excluya a la sociedad civil de las definiciones cruciales relativas a los asuntos públicos aludidos (producción, crecimiento, distribución, reproducción, consumo). Los procesos de reforma operados a lo largo de dos décadas (en el plano económico, en lo atinente al Estado, a la prevalencia del mercado, a los cambios en las instituciones públicas) suscitan al menos grandes interrogantes que deberían ser abordados de un modo plenamente democrático; vale decir, con la más amplia participación ciudadana en procura de modelos alternativos, o al menos en la búsqueda de salidas transitorias pero orientadas a la superación de la crisis estructural que padece la mayor parte de las naciones del subcontinente. Es allí donde los movimientos sociales hacen sus aportaciones esenciales, no sólo como portadores de legitimidad, sino porque desde sus prácticas sociales han cultivado nuevas formas de articulación de intereses y aspiraciones. En esencia, se trata por un lado de redefinir el valor de la política y la democracia –esto es, desde el punto de vista sustantivo– y por otro, de repensar la ingeniería institucional capaz de fraguar en nuevos esquemas y formatos los canales sensibles a una participación ciudadana que deje de ser instrumentalizada, para constituirse en basamento de la estabilidad democrática de largo plazo.

Esto supone necesariamente la redefinición de la política como espacio público, como práctica cívica, como ejercicio de la democracia, en la que los ciudadanos son sujetos que forjan sus propios destinos y los destinos del colectivo, de la comunidad, de la sociedad en su conjunto. Los partidos políticos interpelados han de asumir su renovación como condición de afirmar su irrenunciable e irreemplazable carácter de mediadores de intereses diversos, asumiendo asimismo la innegable existencia de otros mecanismos y mediaciones provistos por los movimientos sociales, que expresan a su tiempo las demandas, aspiraciones, anhelos, sueños y utopías, desde el ejercicio democrático en su cotidianeidad subjetiva. La democracia necesita repensarse, tal vez hasta reinventarse. La democracia procedimental deja la sensación de un ritual formalista, del cual se ocupan los profesionales de la política, constituyendo un serio peligro para su integridad como sistema de convivencia social la perpetuación de mecanismos que implícitamente refuerzan la idea de la democracia elitista competitiva y no promueven,

al contrario, la implicación activa de los ciudadanos para dotarla de sentido sustantivo.

A la luz de los aprendizajes recogidos en los últimos veinte años en América Latina y el Caribe, es pertinente replantearse la reconceptualización de la democracia a partir de la noción de *sujeto democratizador*, que para nuestro análisis se asimila a la de movimientos sociales en movimiento democratizante. Podrá replicarse que no todos los actores y movimientos sociales son portadores de capacidades de contribución en aquella dirección, que en su mayoría defienden legítimamente sus intereses particulares o corporativos. Sin embargo, el examen minucioso y de casi disección que realizamos en el presente trabajo no nos deja duda respecto de las señas de una topografía social de construcción democrática, en el sentido de participación fecunda, respetuosa, apropiada por quienes la construyen cotidianamente en procesos complejos pero no exentos de contradicciones, fricciones, frustraciones o logros sostenidos. Democracias que se manifiestan en asambleas multitudinarias, en espacios íntimos de reflexión y debate barriales o comunales, en el ejercicio de una gestión colectiva, de una autogestión en favor de un propósito común, en el diálogo intergeneracional y a partir de culturas diversas.

Desde luego, no apelamos al misticismo de las bases populares inmaculadas, ni a reduccionismos que sumergen la realidad social y organizacional en laberintos inextricables, dejando en la superficie sólo lo aparente; actores que participan, sacrificio de los “de abajo”, pureza de la práctica social. Nada de eso. Precisamente, hemos hecho especial hincapié en los vínculos de los movimientos sociales con el sistema político y oportunamente aludimos a las disputas por el poder, la hegemonización y el control de los movimientos sociales; también argumentamos acerca de sus carencias o virtudes orgánicas, examinamos sus discursos, sus débiles o fuertes capacidades de convocatoria y movilización, sus grados de autonomía. En suma, intentamos dibujar y pintar con paleta policromática lo que desde nuestras percepciones y marcos de interpretación nos sugieren los movimientos sociales contemporáneos en América Latina. Efectivamente, nos ilustran de itinerarios y rutas a veces crispados por la sublevación, otras veces marcados por el regocijo de las conquistas sociales, en ocasiones por la apatía y el fracaso estratégico, y en otras oportunidades por el acierto de sus propuestas. Movimientos sociales que pueden –lo han demostrado reiteradamente– contribuir a reconstruir democracias incluyentes, abiertas a la participación, orientadas a la equidad, depuradas, consolidadas desde el respeto de los derechos ciudadanos y la efectiva promoción de su pleno ejercicio.

La recuperación de la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas, sean estas el Parlamento, los partidos políticos o

el Poder Ejecutivo, retomará un sendero seguro siempre que se abran canales, vehículos o arterias de comunicación, control y participación ciudadana en el proceso decisonal en los asuntos públicos. En esa senda, los movimientos sociales tienen inmejorables posibilidades de contribuir, de ser protagonistas en el proceso de refundación democrática, lo que asimismo le exige al sistema político innovar en términos de formatos institucionales más adecuados y aptos para captar y canalizar esa participación social. De otra parte, para incrementar la confiabilidad en las instituciones democráticas, también será requisito imprescindible la mejora sustantiva del bienestar de las poblaciones, y muy especialmente de aquellos sectores sociales que han pagado el precio más caro por la implantación del modelo neoliberal. La brecha social en América Latina y el Caribe, cuyo perfil de desigualdad es de los peores en el planeta, deberá revertirse paulatina y progresivamente, sin pausa pero con prisa, dadas las urgencias de miles de latinoamericanos sumidos en la pobreza extrema, para quienes la democracia es sólo un vocablo a veces siquiera conocido. Las democracias son también evaluadas por sus rendimientos y, habida cuenta de los resultados económicos y sociales de los últimos veinte años, el saldo pareciera negativo. Imaginarse futuros escenarios democráticos obliga a incorporar en consecuencia las variables económicas (no acotadas sólo al crecimiento del PBI), de bienestar social y personal (medidas por el grado de accesibilidad a servicios, prestaciones e infraestructura), de desarrollo social y cultural (respeto e inclusión de la diversidad étnica, de género o generacional), de solidez en las instituciones (participación, garantía de las libertades, pleno ejercicio de los derechos ciudadanos), de rutas que superen las pobreza y reencaucen al subcontinente por caminos de igualdad y equidad social. Estos son desafíos para la sociedad toda, para las elites gobernantes y para los movimientos sociales, para los partidos políticos y para los legisladores electos; en fin, responsabilidad de todos y cada uno de los actores en el juego de la convivencia social, que no soslaye el conflicto (de clases, de sectores o actores), pero que intente al menos recomponer el marco normativo, ético y político adecuado para su dilucidación pacífica y civilizada.